

Autor: Licenciado en Sociología Juan Sebastián Califa (UBA) y Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (IDAES-UNSAM). Doctorando en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Pertenencia Institucional: UBA-UNGS (Instituto de Desarrollo Humano)-CONICET.

Mesa 2: "El movimiento estudiantil de la Reforma a la Revolución (1955-1976)"

Posiciones universitarias frente a la intervención de 1966

1. Introducción

En este trabajo me propongo desbrozar con cierto detalle las posiciones universitarias frente al golpe de Estado de 1966, tiempo en que las universidades nacionales vieron concluida la autonomía universitaria con la que gozaban al ser intervenidas por el Poder Ejecutivo de facto. En particular la mirada estará puesta en lo acaecido en relación al movimiento estudiantil. Asimismo, lo ocurrido en la Universidad de Buenos Aires (UBA) será tratado con particular interés. Si bien cada nuevo aniversario de la “noche de los bastones largos”, nombre con que se conoció la intervención policial a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, merece diversos comentarios periodísticos, éstos no dejan de repetir lo que se sostuvo el año anterior y no agregan demasiado al asunto. Este trabajo, por el contrario, se propone, a partir de diversas fuentes primarias y secundarias, ofrecer un relato más puntilloso de lo sucedido.

2. El contexto previo

Desde la asunción del radical del pueblo Arturo Illia a la presidencia a fines de 1963 la Universidad pública cobró mayor notoriedad. Todo lo que sucedía dentro de estas casas como fuera de las mismas, sobre todo en relación al accionar del movimiento estudiantil en la protesta social, mereció el comentario cada vez más virulento de la gran prensa. Por lo general, se aludía a estos episodios como “extremismo” o “subversión” y a las facultades como “cueva” o “nido de comunistas. La reacción de la gran prensa no hacía otra cosa que reflejar la reacción de la burguesía en general y de los partidos o figuras políticas que conciliaban o la representaban de un modo más directo. Una expresión nítida la ofreció la Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres

(ACIEL) que reunía las más importantes cámaras empresarias al emitir a mediados de junio de 1965 una solicitada donde hacía saber que la indisciplina reinaba en las universidades. El comunicado preconizaba la eliminación del régimen tripartito de representación, en fuerte alusión al peso de los estudiantes en él, del gobierno en la Universidad. Esta declaración merecería la respuesta del Consejo Superior de la UBA. El decano de Ciencias Exactas y Naturales, Rolando García, plantearía en sesión que los “ataques” tenían por objeto “arrasar con la Universidad Nacional”.¹ La solicitada, publicada en momentos en que volvía a tensarse la lucha por el presupuesto universitario, debe ubicarse en una campaña generalizada contra el “comunismo apátrida” que impulsaba “actividades antiargentinas”. En respuesta, desde las universidades aparecían voces que advertían sobre el menoscabo de la autonomía universitaria que se buscaba con declaraciones como aquella. Llegado el caso, se sabía, los impulsores de la campaña opositora a la Universidad pública tratarían de concretar la intervención de las casas de altos estudios.

A mediados de agosto de 1965 sería asesinado en un confuso episodio el estudiante de Antropología de la UBA Hernán Spangelberg. El crimen, aunque se carecía de pruebas fehacientes sobre sus motivaciones y sus autores permanecían en las sombras, brindaría una nueva oportunidad para insistir con dichas críticas de corte macartistas. Tras protagonizar una fuerte discusión política en la facultad con militantes de izquierda, algo que era habitual en Spangelberg como representante de una tendencia de signo político adverso, se dirigiría a la localidad de La Florida, contigua a la capital, junto a su novia a visitar un profesor. Una vez allí, sería asesinado en la calle frente a su pareja, en un episodio lleno de dudas que incluía la eficaz huida de los asesinos de quienes no se sabría nada más. De inmediato, se tejerían toda clase de elucubraciones que tenían por objeto vincular a la Universidad, y particularmente a la Facultad de Filosofía y Letras, con un clima de “subversión” que fomentaba directa o indirectamente. El móvil del crimen de Spangelberg se intentaría vincular subrepticamente, sin ninguna prueba concreta, a sus opositores juveniles en esa casa de estudios. Según este discurso acusatorio el asesinato estaba relacionado con el accionar del Ejército Guerrillero del Pueblo desbaratado en el monte salteño el año pasado (en esta experiencia habían participado, y muerto, estudiantes universitarios porteños y

¹ *Actas Taquigráficas de la sesión celebrada por el Honorable Consejo de la Universidad de Buenos Aires, 24-6-65, p. 22 (7.995).*

cordobeses). Los militantes atacados estudiantiles, por su parte, asistirían sorprendidos al hecho, deslindándose enfáticamente de cualquier responsabilidad en el asunto.²

La cuestión de la “amenaza comunista” era agitada desde diversos sectores de la seguridad pública y la burguesía, alentados por la embajada estadounidense, quienes sostenían que había infiltración en los gremios, algunas áreas del Estado y hasta una parte del empresariado nacional aunque probablemente hayan sido las casas de altos estudios su blanco predilecto. La propaganda adversa alcanzarían su cenit con la interpelación de Diputados a los ministros del Interior y de Educación y Justicia acerca de la “penetración comunista en la Universidad” efectuada el 20 de agosto de 1965 –los críticos estudiantiles no dejarían de recordar el papel que le cupo al diputado conservador Emilio Jofré integrante de la derechista Federación de Partidos de Centro—. En una nota previa el último ministro le había solicitado información al rector acerca de lo que ocurría en la UBA. Hilario Fernández Long, el rector de la Universidad porteña, en respuesta sostendría: “[...] es necesario tener sumo cuidado de que, por la vía de querer suprimir o corregir actos condenables, no se llegue, por pasos sucesivos, a lesionar esa libertad [...]”.³ Días más tarde, por resolución del Consejo Superior, el rector brindaría una conferencia donde relataría la obra positiva desarrollada en la casa a la vez que defendía la misma como una institución democrática que amparaba la participación estudiantil en sus decisiones.⁴ Otras voces similares se levantarían en la comunidad universitaria, aunque los sectores opositores liderados por las autoridades de la Facultad de Derecho abonarían la idea de “infiltración comunista”.⁵ A mediados de

² Varias versiones circularían al respecto. El Movimiento Nacionalista Tacuara rápidamente en conferencia de prensa asumiría a Spangelberg como un enlace propio en esa facultad que, según su relato, constituía un escollo para los comunistas. La organización en cuestión declararía además que su muerte estaba vinculada a la guerrilla de Salta. Otros testimonios, de los que se hacía mayoritariamente eco *La Nación*, desmentirían su pertenencia a dicha agrupación, aunque ratificarían la vinculación con lo de Salta y agregarían que los guerrilleros habían robado piezas arqueológicas en poder de la Facultad de Filosofía y Letras para financiar su actividad, cosa que habría sido detectada por el asesinado. Entre los estudiantes de izquierda, por su parte, circulaba el rumor de que Spangelberg era un “servicio” (un agente de inteligencia estatal). Éstos intuían que su presencia en la casa de estudios podría estar en sintonía con lo de Salta, aunque no había claridad sobre el móvil de su asesinato (en voz baja algunos sostenían que se trataba de una interna en esa fuerza). De esta investigación, que recuérdese no es ni periodística ni judicial, no surgen pruebas concretas de nada. Agréguese que el caso ni siquiera es mencionado en el trabajo de Rot sobre el EGP: *Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina: la historia de Jorge Ricardo Masetti y el ejército guerrillero del pueblo*, Waldhuter Editores, Buenos Aires, 2010.

³ *La Nación*, 21-8-65.

⁴ “La Universidad, entronque positivo con la vida del país”, en *Boletín de Informaciones de la UBA*, año VIII, nº 57, Buenos Aires, octubre de 1965, pp. 19-23.

⁵ Así, por ejemplo, en la sesión de Consejo Superior del 10 de septiembre de 1965 el decano de Derecho pediría que se investigue la denuncia hecha por el diario *La Prensa* sobre infiltración comunista en la Universidad.

octubre de 1965 un comunicado elaborado por el rectorado al que se adhirió el Consejo Superior comenzaba diciendo:

El rectorado de la Universidad de Buenos Aires considera indispensable advertir a la opinión pública que el ataque a la Universidad, al que ya nos hemos referido en varias oportunidades, continúa desarrollándose. Este ataque se manifiesta, por ejemplo, en el pedido de intervención a la Universidad propuesto por un sector político; otros sectores propugnan, a su vez, la modificación de la Ley Universitaria.⁶

Dentro del bloque que defendía públicamente la autonomía universitaria también las tensiones alcanzarían su punto máximo. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, apodada “la cueva de los bolcheviques”, un incidente a mediados de ese mes de octubre de 1965 volvería a poner a toda la UBA en el ojo de la tormenta. Un grupo de estudiantes desde la azotea de la Facultad atacaría con monedazos a generales y sus subordinados que realizaban un homenaje a Julio Argentino Roca en su céntrico monumento, acto en el que se encontraba presente el presidente. “Los estudiantes adelantaban su opinión sobre la revolución que se gestaba. Los que recibieron la lluvia de monedas quedaron con la sangre en el ojo”, comentaría más adelante alguien allegado a los militares.⁷ Por el episodio, que pondría nuevamente en la picota la cuestión de la autonomía y de la “extraterritorialidad que permitía”, la Universidad presentaría sus sentidas excusas a Illia. Otras situaciones de tensión con las autoridades se había ya vivido en esta Facultad. Así, un congreso internacional sobre el sol pactado para 1965 fue levantado a causa del “clima poco propicio” que auguraban las agrupaciones reformistas ante la presencia de representantes estadounidenses.⁸ Pese a ello, el decano había sabido mantener la unidad con el estudiantado reformista. En cambio, en Filosofía y Letras el clima de enorme contestación que se vivía⁹ erosionaría de tal modo la relación con las autoridades que el decano José Luis Romero, uno de los mayores referentes del sector docente modernizante, terminaría por renunciar, tras un

⁶ “Nuevos ataques a la Universidad”, en *Boletín de Informaciones de la UBA*, año VIII, n° 58, Buenos Aires, noviembre de 1965, pp. 1-2. La Federación Nacional de Partidos de Centro propiciaba en la Cámara Baja un nuevo proyecto de ley universitaria en cuyo articulado se hablaba de autarquía en vez de autonomía, se restringía la participación estudiantil y se planteaba el apoliticismo en la Universidad. *La Nación*, 5-11-65.

⁷ En Roberto Roth: *Los años de Onganía. Relato de un testigo*, Ediciones La Campana, Buenos Aires, 1980, p. 181.

⁸ Volante “Yankis Go Home” firmado por el Movimiento Universitario Reformista. (Archivo Personal de Lucila Edelman)

⁹ Según el periódico de los universitarios comunistas un memorial firmado por Juan Carlos Onganía entre otros generales le pedía a Illia la intervención de esta Facultad. Sergio Rodríguez: “Tomemos conciencia del peligro. En defensa de la universidad y por el presupuesto: unidad y lucha”, en *Línea*, año 4, número 5, Buenos Aires, octubre de 1965, p. 5. (Archivo Personal de Lucila Edelman)

amago rechazado por el consejo directivo, a comienzos de noviembre de 1965 alegando su incapacidad física y moral para continuar en el cargo.

La sucesión de acontecimientos políticos tensos desarrollados durante 1965 en la UBA a los que hacen referencias las fuentes relevadas, dan cuenta de un proceso vertebrado en una radicalización estudiantil en ascenso constante hacia la izquierda del arco político. “La penetración marxista” y otros términos similares a los que se hizo alusión expresaban la conciencia que desde el extremo opuesto al que se ubicaban los jóvenes universitarios se tenía de su activismo. Como se observa, la radicalización de los estudiantes era un producto de un contexto de enérgicos enfrentamientos sociales en medio de los que todas las posiciones del arco político se radicalizaban. Tanto los obreros en lucha por su salario como las organizaciones enroladas con la derecha política que observaban con estupor este nuevo clima de protesta, se habían radicalizado en sus discursos y, sobre todos, en sus acciones políticas. En la creciente disputa entre los oponentes que animaban la escena nacional los equilibrios que realizaban quienes se colocaban en su centro, como el propio presidente Illia, resultaban cada vez menos fructíferos. La era de los extremos había comenzado y no dejaba lugar para medias tintas. El alza general de la lucha de clases sobre el que se erigía este proceso de radicalización política estudiantil, no resultaba por lo tanto inocuo para dicho movimiento.

El año 1966 arrancó en las universidades nacionales con un gran movimiento de protesta por el presupuesto que corroboraría una situación que se había ido poniendo cada vez más tensa. A fines de 1964, tras un enorme movimiento de protesta en el que el movimiento estudiantil jugó un papel destacado, el presupuesto universitario se había incrementado de modo significativo. Pero ya a fines de 1965 la sanción de una nueva Ley de Presupuesto de la Nación comenzaba a generar polémica con las universidades públicas. Éstas a través del Consejo Interuniversitario Nacional reclamaban fondos por 35.000 millones de pesos para poder subsistir de un modo elemental mientras que el Poder Ejecutivo les ofrecía 20.000 millones. A esta situación se sumaba el hecho de que un gobierno cada vez más debilitado no podía sancionar el presupuesto en un Congreso que desde mediados de 1965, tras el triunfo de la peronista Unidad Popular, sumado a la presencia relevante de otros partidos, le era adverso. Las tensiones en torno al presupuesto universitario habían derivado en numerosas marchas y actos políticos donde se habían manifestado el cuerpo universitario. En Buenos Aires el momento cumbre de esta conflictividad había tenido lugar el 24 de mayo de 1966 tras un acto que

todo el movimiento de lucha por el presupuesto llevó adelante en la Facultad de Ciencias Económicas. Según la revista *Primera Plana* unas 10.000 personas se congregaron en esa jornada.¹⁰ En él hablarían dos representantes de los graduados, dos de los estudiantes, uno por APUBA y el rector Long de la UBA junto a su par de Tucumán. Tras el mismo saldría una manifestación estudiantil de la casa de estudios que a las pocas cuadras sería interceptada por la policía quien la obligaría, mediando férreas confrontaciones que incluían autos quemados, a retroceder. Los manifestantes se refugiarían en la facultad, unos mil quinientos con gran presencia de los comunistas, desde cuya azotea lanzarían proyectiles a los policías que los habían obligado a disolver la concentración, respondiéndole éstos con gases lacrimógenos. El diario *La Nación* describía a los manifestantes como “una especie de guerrilla”. Los estudiantes resistirían la orden de desalojo que pesaba sobre el espacio que ocupaban. Recién abandonarían la facultad bien entrada la madrugada cuando, después de negociaciones con el juez y el decano, se les garantizaba la libertad.

A fines de mayo de 1966, en un clima de protesta nacional, la prensa daba cuenta de que el aumento que evaluaba otorgar el bloque de senadores de los radicales del pueblo alcanzaba apenas los 5.500 millones de pesos, lo que se ubicaba muy por debajo no sólo de las aspiraciones primigenias sino también de la cifra que finalmente desde el rectorado se habían resignado a aceptar ante el ofrecimiento de los diputados. Esta situación, claro está, lejos de abrir un canal de diálogo para la solución del conflicto, lo agravó. Entretanto, los no docentes continuaban con sus medidas de fuerza mientras que el resto de los universitarios tendían a dividirse cada vez más en dos grandes polos que discutían si continuar o no las medidas de lucha. Los reformistas estudiantiles se mostraban como el sector más dinámico en la lucha presupuestaria. Para entonces la Federación Universitaria Argentina (FUA) buscaba el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien ya se había manifestado a favor de su reclamo, planeando un acto conjunto el 9 de julio, fecha donde se celebraría un nuevo aniversario de la independencia nacional, de “carácter popular y antiimperialista”. Para el 1 de junio de 1966 los senadores oficialistas empezaban a hablar de un incremento de 7.200 millones de pesos. En medio de crecientes enfrentamientos y de una interna cada vez más enconada entre quienes reclamaban por el presupuesto, los humanistas por ejemplo

¹⁰ “En busca de 7.800 millones de pesos”, año IV, n° 179, Buenos Aires, 31 de mayo al 6 de junio de 1966, pp. 20-21.

criticaban el accionar callejero de los reformistas, la Universidad publicaría una solicitada el 9 de junio en la que volvía a reclamar por el presupuesto.

Como se observa, a esta altura de los acontecimientos las autoridades universitarias se consolaban con obtener el aumento prometido días antes. El 17 de junio de 1966 el Senado finalmente aprobaría el presupuesto que contemplaba dicho incremento de 7.200 millones que se sumaban al monto original de 20.000 millones de pesos. Ahora restaba que los diputados lo sancionaran. Sin embargo, poco a poco las preocupaciones de los universitarios empezaban a trasladarse a otra cuestión: la alteración institucional. Para ese entonces la posibilidad de una intervención se hacía cada vez más visible. Según los detractores del rector de la UBA, éste había abierto el camino a la “subversión institucional” permitiendo a los “estudiantes extremistas” ganar las calles. Además, el golpe de Estado empezaba a estar en boca de todos. La Convención Nacional de Centros de la FUA realizada en Santa Fe entre el 18 y 20 de junio de 1966 pondría en el centro de sus preocupaciones esta posibilidad que ya se intuía inminente. Un delegado de la CGT la confirmaría y propondría que los estudiantes se sumen al nuevo gobierno. Esta “posibilidad imposible” sería rechazada de plano por las formaciones políticas allí reunidas.¹¹ Las sospechas de todos se confirmarían la semana siguiente cuando el golpe de Estado acabe con el gobierno constitucional de Illia.

3. “Operación Escarmiento”

El 28 de junio de 1966 se instalaba en el sillón presidencial el general retirado Juan Carlos Onganía liderando el autoproclamado gobierno de la “Revolución Argentina”. En su asunción se hizo presente un amplio abanico de personalidades que incluía figuras destacadas del mundo empresario junto a gremialistas de fuste como el propio líder de la CGT Augusto Vandor. Guillermo O’ Donnell ha denominado “consenso de

¹¹ “‘Esto no puede seguir, no hay nada más esencialmente reaccionario que este gobierno, y obreros, estudiantes y militares deben marchar juntos para proyectar a la Argentina como una gran Nación’: la definición partió de un militante gremial, que conversó con los universitarios a propósito de la conferencia y de acuerdo con el plan de relaciones obrero-estudiantiles.

Para los dirigentes de la FUA, sin embargo, esa teoría no podía siquiera ser considerada: toda su estructura ideológica y temperamental se inclinaba por el civismo, el mantenimiento de Illia en el poder como alternativa preferible a un golpe de Estado. Además era la autonomía de la Universidad la que aparecía como cuestionada por las Fuerzas Armadas, que aparentemente reclamaban la intervención.” “Preparativos para una gran batalla”, en *Confirmado*, año 2, n° 54, Buenos Aires, 30 de junio de 1956, pp. 24-26, p. 24 y ss.

terminación” a la amplia unidad gestada en torno al objetivo de acabar con el régimen político en curso, unidad que no preveía por cierto acuerdos en relación al nuevo régimen a desarrollar.¹² El comando militar se ocupó meticulosamente, por ese entonces, en identificar esas jornadas con una imagen de total eficacia asociada con la impronta que se pretendía para el gobierno. Ésta de hecho chocaba de lleno con la situación de caos social y consiguiente “vacío de poder” con que se aludía a la etapa saliente. Se iniciaba así lo que una plétora de analistas del período han llamado “modernización autoritaria”, etapa donde el “tiempo político” quedaría supeditado a los objetivos trazados para el “tiempo económico”.¹³ En ese sentido, el horizonte gubernamental de largo plazo requerido por las tareas a emprender singularizaba el proyecto de estos golpistas respecto a sus antecesores marcados por el signo provisorio con que habían encarado siempre sus funciones.

Frente a las nuevas autoridades nacionales, la situación del movimiento estudiantil radicalizado era sumamente delicada. En sí éste se identificaba con todos aquellos rasgos contestatarios que el nuevo gobierno proyectaba dar por tierra. El derrotero de activación política de los últimos años analizado, lapso en el que la consigna “más presupuesto universitario y menos presupuesto militar” había establecido claramente el enemigo del joven reformismo, constituía motivo suficiente de indignación para el nuevo Ejecutivo. La Universidad conformaba en ese sentido un territorio hostil. En lo inmediato poco importaba erigirla como baluarte de modernización social. Antes de encarar esa faena era prioritario imponer el orden en sus aulas. A esa tarea se abocaría el gobierno de facto en breve.

Pocas horas antes de que Illia abandonara la Casa Rosada el Consejo Superior de la UBA emitiría una declaración en que se hacía un llamado enfático a defender la autonomía universitaria a su vez que se bregaba por el gobierno democrático. Un grupo minoritario de consejeros “rebeldes” entre los que se encontraban los decanos de

¹² “Estado y alianzas en la Argentina”, en *Desarrollo Económico*, vol. 16, n° 64, Buenos Aires, enero-marzo de 1977, p. 161.

¹³ Juan Carlos Portantiero afirma: “Al asumir el poder en 1966, las Fuerzas Armadas justificaron la intervención en base al planteo de objetivos trascendentes, en términos de ‘empresa nacional’. No se evocaron entonces –al menos de manera principal– necesidades de defensa del Orden frente a la Subversión, sino fines positivos: ‘modernizar’ al país, encauzarlo hacia la ‘Grandeza’ superando la parálisis a que lo habrían llevado las pujas facciosas, insectoriales, encarnadas en los partidos políticos. Así lo razonaban la retórica del ‘Mensaje de la Junta Revolucionaria al Pueblo Argentino’ [...]” “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, en Oscar Braun (comp.): *El capitalismo argentino en crisis*, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 1973, pp. 73-117, p. 94.

Derecho y Medicina se ausentaría de la reunión dejando expresado así su malestar con el comunicado. El texto aprobado sostenía:

En este día aciago en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el Rector de la Universidad de Buenos Aires, hace un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía universitaria, que no reconozcan otro gobierno universitario que el que ellos libremente han elegido de acuerdo con su propio Estatuto, y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia.¹⁴

El comunicado aunque pretendía alertar sobre la intervención en puerta indirectamente llamaba más aún a ésta al adoptar ese cuerpo directivo una posición de intransigencia respecto al golpe de Estado –ese mismo día había sido ocupada por fuerzas militares la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral–. Se trataba del único pronunciamiento público a la violación de la constitución levantado por una institución estatal. Los fundamentos expuestos por este órgano abrirían un parteaguas en la UBA durante los primeros días de julio de 1966. La FUA rápidamente haría público su apoyo a lo dispuesto por dicho consejo a la vez que subrayaba la materia “gorila” y “fascista” del nuevo gobierno. El decano de Derecho porteño, Marco Aurelio Risolía, ascendido por el nuevo gobierno a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente presidiría, firmaría con otros profesores una nueva declaración criticando lo actuado por el rector y el Consejo Superior.¹⁵ Este tipo de declaraciones favorables y contrarias a lo resuelto por ese órgano de gobierno se reiterarían en los días

¹⁴ La reunión, de acuerdo a lo informado por las actas del Consejo Superior, tendría lugar a media mañana y el comunicado al que se alude sería redactado a las 4 de la madrugada por el rectorado y un grupo de consejeros. Éstos eran: los decanos Antonio Pires (Agronomía y Veterinaria), Luis Aznar (Filosofía y Letras), Rolando García (Ciencias Exactas y Naturales), Zenon Lugones (Farmacia y Bioquímica), Horacio Pando (Arquitectura), Honorio Passalacqua (Ciencias Económicas), Teseo Roscardi (vice decano de Ingeniería), Lepanto Bianchi, Alfredo Mur, Jaime Schujman, Miguel Rubinstein, Jorge Togneri, los estudiantes Roberto Averbuj, Elvio Doderó, Mario Marangós, Horacio Morales y Sergio Rodríguez. Más adelante el consejero estudiantil declararía que por dificultades telefónicas no pudo enterarse de la reunión, cuyo comunicado avalaría. El rector sostendría que con el profesor Klimovsky no se pudo comunicar la secretaria, éste más tarde extendería su apoyo a lo actuado. Otro tanto ocurriría con el decano de Ingeniería Ciancaglini quien tras referir que no le llegó la comunicación de dicha reunión, aprobaría la declaración que ésta emitió. Tras un largo receso, proseguiría la reunión y se aprobaría un comunicado que fustigaría fuertemente contra el golpe de Estado. En esa nueva cita el decano de Ciencias Exactas y Naturales afirmarí: “Lamento que quienes nos han intentado dar tantas lecciones de Derecho en este Consejo Superior durante tantos años, en el que el momento en el que el Derecho está totalmente arrasado en el país están ausentes.” *Actas Taquigráficas de la sesión celebrada por el Honorable Consejo de la Universidad de Buenos Aires*, p. 5 (19.783).

¹⁵ Según Liliana De Riz: “Poco antes del golpe *Primera Plana* publicó un sondeo de opinión según el cual, entre el grupo de los profesores, el golpe no horrorizaba tanto ni a tantos, como ocurría con otros sectores de la sociedad. Un 40 por ciento eran golpistas y un 10 por ciento se pronunciaban a favor del golpe a condición de que hubiera una rápida salida electoral.” En *La política en suspenso 1966-1976*, Paidós, Buenos Aires, 2000, p. 15.

siguientes. Entre los comunicados adversos en la Universidad algunos explicitarían además su apoyo al gobierno de la “Revolución Argentina” mientras que otros llegarían a pedir la pronta intervención de la casa de estudios y la clausura de los centros de estudiantes.¹⁶

A pesar de la profusa difusión de comunicados en la UBA, favorables y desfavorables al golpe de Estado, durante los primeros días de julio reinaría un clima expectante. “Excepto los comunistas, todos dieron por descartada –desde principios de semana– una especie de tregua unilateral por parte del gobierno –no intervención si no existe provocación– y estaban dispuestos a respetar así las reglas de juego.”, informaba la revista *Confirmado*.¹⁷ La revista señalaba, no obstante, que desde el bando acosado por una posible intervención se habían empezado a estudiar los pasos a seguir si ésta finalmente sucedía. La noticia hace observable la intención de las máximas autoridades de la UBA de conservar, pese a todo, el estatus vigente de la institución. Pero en la segunda mitad del mes las tensiones empezarían a aflorar, la posibilidad de establecer algún tipo de connivencia con el gobierno caería así en desgracia. A la par que los nuevos rectores retomarían su prédica por mayor presupuesto universitario, la perspectiva de la intervención aparecería como inevitable. En estas jornadas se registrarían incidentes en dos facultades. El 21 de julio miembros del Movimiento Nacionalista Argentino atacarían a punta de pistola a los militantes del Movimiento Universitario Reformista en la Facultad de Derecho, quienes dirigían el Centro, hiriendo de bala a un estudiante. Dos días más tarde en la Facultad de Odontología una bomba estallaría en el local del centro provocando graves destrozos. Ante estos episodios de violencia el rector no dudaría en sostener que “tienen interés en crear una imagen falsa de desorden y violencia.”

¹⁶ “El diario *Clarín* publicó el 15 de julio: ‘Representantes de catorce agrupaciones entregarán al Ministro del Interior una nota en la que se solicita: supresión del gobierno tripartito, disolución de todos las agrupaciones estudiantiles, expulsión de los profesores marxistas, e intervención y reorganización de la Editorial Universitaria. El documento alude a una autonomía mal entendida que permite la extraterritorialidad de los locales universitarios, de manera que la Policía no puede reprimir los desmanes que en ellos a diario se cometen. (...) Por último, señala el documento que ‘es ingenuo hablar de infiltración marxista porque la Universidad es marxista’. Firman: Agrupación de Ciencias Económicas, Agrupación Libertad de Filosofía y Letras, Frente Anticomunista de Odontología, Frente Independiente de Ciencias Económicas, Frente Universitario Independiente, Grupo de Acción de Ingeniería, Sindicato Universitario Argentino, Sindicato Universitario de Arquitectura, Sindicato Universitario de Medicina, Sindicatos Universitarios de las Universidades Privadas y el Movimiento Universitario de Centro Auténtico de Derecho.’” En Alejandra Gómez: *No nos han vencido... Historia del Centro de Estudiantes de Derecho – UBA*, Eudeba, Buenos Aires, 1995, p. 113 y ss. (cursiva del original).

¹⁷ “Después de 72 horas ya era otra cosa”, año 2, n° 55, Buenos Aires, 7 de julio de 1966, pp. 18 y 20, p. 18.

Finalmente, el viernes 29 de julio de 1966 llegaría el momento que ya todos daban por descontado. La intervención de las universidades nacionales se decidiría una vez confiada la Subsecretaría de Educación al abogado Carlos María Gelly y Obes, quien dictaba cátedra en la Facultad de Derecho, cartera dependiente según la nueva estructura del Ministerio del Interior. Según Robert Potasch, en una entrevista posterior el nuevo encargado de la cartera educativa le confesó que la medida había sido tomada antes de que él asumiera. “La decisión de eliminar la autonomía de las universidades no llegó como resultado de una discusión cabal en la que participaron los integrantes civiles del gabinete, sino como una decisión en la que prevalecieron las consideraciones militares y de seguridad”, añade este autor.¹⁸ El decreto-ley 16.912 firmado por el presidente de facto Juan Carlos Onganía dispondría, intentando acotar el impacto negativo de la medida, que los rectores y decanos universitarios pasaran a ser designados por el Poder Ejecutivo en carácter de administradores. El periodista Gregorio Selser, ex militante reformista, advirtió tempranamente que pese a que se trataba de una intervención esa palabra no aparecía en el decreto-ley, argucia que adjudicaba a los juristas de la Facultad de Derecho que colaboraron en su redacción.¹⁹ Pero más allá del uso de formalismos, era claro que con esta medida se daba por tierra con todo atisbo de autonomía universitaria y de democracia interna. A última hora de la tarde el rector porteño haría pública una nota en que se negaba a asumir las funciones de administrador de la casa de estudios que le confería la nueva ley universitaria. A esta decisión se plegarían el secretario y el prosecretario de la UBA, quienes presentarían sus renunciaciones, y los decanos de todas las facultades a excepción de Derecho. Poco más tarde un nuevo comunicado firmado por miembros del Consejo Superior, los decanos de las facultades señaladas más los representantes reformistas en graduados y profesores y la totalidad de la delegación estudiantil, reiteraría su defensa de la autonomía universitaria y del Estatuto elegido por los tres claustros y pediría el restablecimiento de la democracia. En el ámbito nacional los rectores de las tres universidades más pequeñas, Aziz Ur Rahman en la del Sur, Carlos Saccone en Cuyo y Jorge Rodríguez en Nordeste aceptarían la nueva legislación y pasarían a ser delegados del Ejecutivo. Por el contrario, los rectores

¹⁸ En *El Ejército y la Política en la Argentina 1962-1973. De la caída de Frondizi a la restauración peronista. Segunda parte 1966-1973*, Sudamericana, Buenos Aires, 1994, p. 23.

¹⁹ El artículo “La noche de los bastones largos”, del que se toma este señalamiento, aparecido en agosto de 1966, fue parte posteriormente de su libro *El onganiano, la espada y el hisopo*, Hyspamerica, Buenos Aires, 1986, p. 127-139, p. 127.

de la restantes cinco universidades nacionales rechazarían este decreto-ley y presentarían sus renunciaciones.

La oposición más estruendosa al decreto-ley 16.912 llegaría de parte del joven reformismo. La autonomía universitaria conquistada hace más de diez años había llegado a su fin. La clausura de ésta autonomía abría, por lo tanto, una etapa de total desamparo para el movimiento estudiantil. En el plano nacional, la FUA respondería inmediatamente a la medida con una declaración que repudiaba y desconocía sus alcances. El comunicado consideraba como autoridades sólo las surgidas de los mecanismos democráticos reglamentados por los estatutos universitarios. Al mismo tiempo, llamaba a luchar a los estudiantes emprendiendo frentes unitarios contra la imposición de la nueva medida en la Universidad y en el país en general. Con particular vigor se convocaba a la CGT a recrear la unidad obrera-estudiantil. Empero, como ya se sostuvo, la central obrera estaba comprometida con la dictadura y esta vez no escucharía la voz de los fuistas. Pese a ello, los estudiantes, y especialmente el reformismo, junto a aquellos que desprendidos por izquierda venían de esta tradición, se lanzarían en Buenos Aires a defender la autonomía atacada. También un sector del humanismo acompañaría la resistencia de los reformistas. No obstante, como se vio, otros grupos se manifestarían a favor de la intervención. Salvo por los miembros del Movimiento Universitario de Centro de Derecho y por ciertos agrupamientos humanistas²⁰, éstos tenían un común denominador en su acotada dimensión y su escasa inserción en el movimiento estudiantil.²¹

²⁰ Según Luisa Brignardello el humanismo quedaría dividido en dos líneas en Buenos Aires: una de derecha encabezada por Braun Cantilo, presidente de la Liga porteña, y otra de izquierda liderada por Jorge Ferro, consejero humanista al momento de la intervención y presidente de la Organización de Estudiantes Humanistas Argentinos (ODEHA). La línea de izquierda rechazaba abiertamente la intervención mientras que la otra la avalaba. De los últimos sostiene: “Un sector del Humanismo de Buenos Aires, que integran las agrupaciones Humanistas de Medicina, Renovadora de Ingeniería, H. de Derecho, Auténtica de Farmacia y Bioquímica y H. de Agronomía, espera que las disposiciones de la ley 16.912 sean transitorias y parte de un proceso de cambio hacia otro régimen universitario.

Algunos días más tarde la Confederación de Agrupaciones Humanistas de Ciencias Exactas al declarar que la extralimitada autonomía amparaba el sectarismo político e ideológico y la corrupción en el orden administrativo y docente manifiesta que tiene el propósito de emplear todas sus fuerzas en la reconstrucción institucional de la Universidad.” En *El movimiento estudiantil argentino: Corrientes ideológicas y opiniones de sus dirigentes*, Macchi, Buenos Aires, 1972, p. 16. Un balance general del humanismo puede consultarse en un artículo de mi autoría: “Los humanistas en la Universidad de Buenos Aires. Orígenes, desarrollo, radicalización política y ocaso de una corriente estudiantil de peso. 1950-1966”, en *Revista de Conflicto Social*, año 4, nº 5, Instituto “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, junio de 2011, pp. 58-87 [en línea <http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/05/index.htm>].

²¹ Una lista de los alineamientos universitarios en torno al golpe de Estado se encuentra en Pablo Bonavena, Mariana Maañón, Gloria Morelli, Flabián Nievas, Roberto Paiva y Martín Pascual:

La UBA se convertiría en el centro de la lucha contra la intervención en el país. La resistencia se materializaría en ocupaciones estudiantiles con diferente alcance. Medicina sería tomada por un pequeño grupo que tras ser advertido por el decano del inminente desalojo que llevarían a cabo las fuerzas policiales apostadas en la puerta de la facultad decidirían abandonar el edificio. En Ingeniería los estudiantes obstruirían el acceso a la casa de estudios y más tarde serían desalojados por la policía. En Filosofía y Letras unos 200 estudiantes serían sacados por la fuerza de la Facultad por parte de las fuerzas del orden. Más violentamente serían tratados los 400 estudiantes que ocupaban la Facultad de Arquitectura. Pero el centro de las miradas recaería sobre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En esa noche del 29 de julio de 1966 ingresarían a esta casa más de cien uniformados pertenecientes a la Guardia de Infantería comandados por el general al frente de la Jefatura de Policía Mario Fonseca; cinco carros de asalto, dos patrulleros, dos celulares y un carro del cuerpo de bomberos los escoltaban en la céntrica sede porteña. Los estudiantes resistirían la “Operación Escarmiento”. El costo que deberían pagar por ello sería de más de una docena de heridos y un número de detenidos que oscilaba entre los 150 y los 250, de acuerdo a que se le dé lugar a la versión oficial o las extraoficiales. La ferocidad de la represión daría nombre a la jornada como la “noche de los bastones largos” por los bastonazos policiales que caerían sobre los cuerpos de hombres y mujeres sorprendidos ante la violencia desatada. Algunos incluso tendrían que someterse a fusilamientos que finalmente sólo quedarían en simulacros que multiplicarían los nervios. La lista de contusos y detenidos la engrosarían docentes encabezados por el decano García que saldría del edificio con el rostro destrozado por un bastonazo. Cabe agregar que algunos testimonios plantean la existencia de civiles, tanto en ésta como en las otras facultades desalojadas, vinculados a los grupos universitarios que corrientemente se enfrentaban con el joven reformismo.²² En ese contexto, serían las agrupaciones reformistas o de origen reformista quienes más activamente resistan el embate. Si bien no se trató de la primera vez que las fuerzas del orden ingresaban a la Universidad porteña como muchas veces se sostiene, durante 1964 habían entrado policías incluso con la complicidad y-o pedido

“Documento N° 4 Alineamientos universitarios frente al golpe de Onganía”, en *Orígenes y desarrollo de la guerra civil en la Argentina 1966-1976*, Eudeba, Buenos Aires, 1998, pp. 154-155.

²² Luis Quesada, por ejemplo, afirma que entre los policías que esa noche desalojaron a los ocupantes de Ciencias Exactas y Naturales se encontraban estudiantes del humanismo local que procedieron a punta de pistola. Su testimonio, junto con otros muy interesantes, puede leerse en Sergio Morero, Ariel Eidelman y Guido Lichtman: *La noche de los Bastones Largos. 30 años después*, Documentos Página 12, Buenos Aires, 1996, p. 34.

de algunas autoridades de ciertas facultades en el marco de las protestas por mayor presupuesto universitario que desarrollaban los estudiantes, el modo enérgico con que esta vez lo hicieron era desconocido.

Algunos autores han planteado dudas sobre la oportunidad de los desalojos y el modo en que fueron llevados a cabo señalando el malestar que provocaron los incidentes suscitados en el seno del gobierno.²³ De hecho, el mes que se tomaría el nuevo Ejecutivo para decidir la intervención da cuenta de las dudas que se tenía sobre qué hacer con la Universidad. Incluso el accionar posterior de la dictadura ha sido interpretado desde esa perspectiva que subrayaba su incertidumbre constitutiva al respecto.²⁴ La carta que al día siguiente de producida ésta publicara el profesor estadounidense Warren Ambrose en el *New York Times*, de visita al momento de los incidentes en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que padeció, sería el detonante de las sentencias que recaería sobre el gobierno argentino en todo el mundo. Sin embargo, como explica O' Donnell, la condena en el país se dirigió a las brutalidades cometidas pero no a la intervención en sí, cosa que el grueso de la opinión pública avalaría. Selser sostiene, por ejemplo, que ninguna organización obrera protestó contra la intervención y ni siquiera contra el salvajismo policial.²⁵ Era claro, la enorme alianza gestada en torno al gobierno golpista dejaba poco espacio para una crítica más cabal que podía ser vista desde las altas esferas gubernamentales como un guiño al comunismo y la “subversión” que el nuevo Ejecutivo, precisamente, se proclamaba combatir.

²³ Mariano Castex informa, por ejemplo, que Onganía tenía plena conciencia de lo negativo del hecho. En *El escorial de Onganía*, Ediciones Hespérides, Buenos Aires, 1981, p. 104.

²⁴ ¿Qué posición adopta el gobierno ante la tormenta que ha desencadenado? En primer lugar se siente obligado a *explicarse* y enuncia sus argumentos que parecen haber sido elaborados después de la acción y no antes de ella. El 3 de agosto, a los cinco días de decretada la intervención se dice en un comunicado oficial que ‘la actitud asumida por el gobierno nacional frente al problema universitario responde a un insistente clamor de la opinión pública contra los desórdenes en que han incurrido organizaciones universitarias’, dando como ejemplos las manifestaciones en relación a la guerra de Vietnam, la intervención de la FIP [Fuerza Interamericana de Paz] en Santo Domingo, el debate del presupuesto nacional (en lo referente a las cuotas asignadas a las universidades) y el asunto de los guerrilleros de Salta. Se hace notar que las universidades nacionales son costeadas por la renta nacional sugiriendo que su uso no debería desviarse de sus finalidades propias. Se asegura que la ley 16.912 no se propone avasallar la autonomía, pero ‘las normas que actualmente rigen la universidad serían objeto de una profunda revisión y elaboradas nuevamente con el propósito de eliminar las causas de acción subversiva.’” En Brignardello: *El movimiento estudiantil argentino: Corrientes ideológicas y opiniones de sus dirigentes*, Macchi, Buenos Aires, 1972, p. 22.

²⁵ En *El onganiato, la espada y el hisopo*, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 136. Unos días antes de la intervención la revista *Primera Plana* informaba que desde el gobierno “[...] se enfatizaba la necesidad de adoptar tan fatídica resolución antes de que ‘termine el idilio con los sindicatos’, pues de tal modo las reacciones estudiantiles no dispondrían de ese respaldo vital.” “Un plan de reformas”, n° 186, Buenos Aires, 19 al 25 de julio de 1966, pp. 11-12, p. 11.

Tras la “noche de los bastones largos” las clases serían suspendidas (recién tres semanas después se reanudarían). Entretanto se registrarían protestas callejeras estudiantiles que serían reprimidas por las fuerzas del orden. Los centros más activos junto a la FUA y la Comisión Intercentros de la Capital Federal serían disueltos por ley.²⁶ El rector de la UBA y la totalidad de los decanos renunciarían en desacuerdo con la disposición que los convertía en delegados del Ejecutivo, aunque tres de ellos (de Medicina, Odontología y Derecho) manifestarían su condescendencia con la reestructuración universitaria en curso.²⁷ El gobierno, por su parte, crearía el Consejo Asesor de la Enseñanza Universitaria Oficial, un organismo compuesto por representantes de todas las universidades nacionales que debía dar vida en breve a un nuevo y definitivo ordenamiento legal de las casas de altos estudios. En la UBA el Ejecutivo designaría como rector al penalista Luis Botet, quien mantenía estrechos vínculos con la Marina. El panorama que se encontraría al asumir era desolador: el éxodo docente en marcha gestado con el afán de repudiar lo sucedido minaba la institución. Un estudio calcula en 1.378 los renunciantes, un 22,4 % del cuerpo de profesores y ayudantes de la UBA. Los números más elevados corresponderían a Arquitectura (47,7%), Filosofía y Letras (68,7 %) y Ciencias Exactas y Naturales (77,4%).²⁸ En el departamento de Física de esta última facultad 69 de los 75 profesores que componían el plantel docente dejarían sus cargos. Del total de renunciantes en la Universidad porteña, unos 300 partirían a centros del exterior. Otros en cambio, en franca minoría, permanecerían, en la medida de lo posible, en las casas de estudios donde tratarían de resistir el embate del régimen junto a los estudiantes. Todos en breve terminarían de comprobar que en aquella noche agitada se había apagado definitivamente el proyecto de Universidad moderna que había dado luz una década atrás.

²⁶ Resultó notable el endurecimiento respecto a la protesta estudiantil de todo el aparato legal represivo del Estado. El constitucionalista Carlos Fayt comenta: “La modificación de un inciso del edicto policial imponiendo prisión de treinta días irredimibles por multa al que participare de un acto público no autorizando a promover desórdenes en la vía pública, unido a todo el mecanismo represivo logró sofocar las manifestaciones estudiantiles de repudio y los impulsó a adoptar nuevas tácticas de lucha.” *El político armado. Dinámica del proceso político argentino 1960-1971*, Eudeba, Buenos Aires, 1996, p. 175.

²⁷ “En la de Buenos Aires todos los Decanos renunciaron a desempeñar la nueva tarea ordenada por el Gobierno. La unanimidad no se logró velozmente: Osvaldo Fustinoni (Medicina), Eduardo Casterán (Odontología) y Federico Videla Escalada (Derecho), discutieron el martes 2 si acompañaban a sus colegas o se separaban de ellos. Al cabo de la reunión, declararon que no asumirían las nuevas funciones ‘a pesar de estar convencidos de la necesidad de reestructurar la Universidad argentina.” “El rayo que no cesa”, en *Primera Plana*, n° 189, Buenos Aires, 9 al 15 de agosto de 1966, sin más datos.

²⁸ En Marta Slemenson: *Emigración de científicos argentinos: organización de un éxodo a América Latina*, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1970.

4. Conclusiones

Si bien el proyecto modernizador gestado tras el golpe de Estado de 1955 entre profesores, graduados y estudiantes modernizadores y reformistas había comenzado a evaporarse progresivamente a causa de las desavenencias con el último claustro que vivía un proceso de radicalización política hacia la izquierda, con el golpe de 1966 quedó definitivamente clausurado. Hay quienes celebran en cierto modo esta clausura, aunque no necesariamente se dedican a defender al golpismo y el gobierno que instaló, o al menos no lo dicen en el presente, aduciendo que la Universidad de entonces era una “isla democrática” que no se ligaba al proceso popular. Por el contrario, se argumenta, tras la intervención de estas casas los estudiantes que las habitaban se volcarían masivamente hacia el campo del pueblo. En realidad, no es acertado considerar el golpe de Estado de 1966 como un parteaguas total en el proceso de radicalización política hacia la izquierda de los estudiantes universitarios. Tal cual se vio, este proceso preexistía aunque de aquí en más tenga que marchar por carriles bien distintos de lo que lo había hecho hasta entonces. Por otro lado, quedan dudas de si la crítica a la Universidad previa se hacía por “isla” o por “democrática”. Más aún podría preguntarse por qué resulta inadecuado defender un espacio de relativa democracia, incluso desde la óptica de las fuerzas contestatarias al orden social, en circunstancias en que otros espacios sociales caen bajo la égida del capital y su política de un modo más brutal. Sea cual sea la respuesta que se le dé a estos interrogantes, o las nuevas preguntas que habiliten, es un hecho que la autonomía clausurada en 1966 tardaría casi dos décadas en recuperarse. La Universidad de los ochenta miraría a esta otra como un referente, cuando no como un ejemplo, bueno y malo en la polémica que despertaría más adelante. Una vez más sea como sea la respuesta, o mejor dicho para llegar a una reflexión más aguda al respecto, es necesario conocer con precisión lo acaecido y evitar así los lugares comunes que es más lo que oscurecen que lo que clarifican, como prometen.